

¿Tormenta perfecta? América Latina: Derecha gobernante, resistencias y futuros

Pável Alemán Benítez

pavel@cipi.cu

Licenciado en Derecho.

Investigador Auxiliar del CIPi.

Resumen:

Latinoamérica y en especial Sudamérica, presenta un complejo contexto económico y político, donde la Derecha ha retornado al gobierno en varios países. De forma simultánea estos gobiernos, políticamente alineados con Estados Unidos, impulsan una agenda de austeridad económica neoliberal combinada con el desmontaje de las políticas públicas inclusivas de los gobiernos precedentes. Se observa una tendencia creciente al empleo de los sistemas judiciales para perseguir políticamente los liderazgos de izquierda en la región. Los procesos electorales más recientes sugieren un futuro pendular con el resurgimiento de fuerzas de izquierda moderadas y pragmáticas, y su ascenso al gobierno.

Palabras clave:

Latinoamérica, economía, procesos políticos, Derecha, elecciones, liderazgos.

Abstract:

Latin America and especially South America, presents a complex economic and political context, where the Right has returned to the government in several countries. Simultaneously, these politically aligned governments with the United States promote a neoliberal economic

austerity agenda that includes the dismantling of the inclusive public policies of previous governments. There is a growing trend in the use of judicial systems to politically pursue leftist leadership in the region. The most recent electoral processes suggest a pendular future with the resurgence of moderate and pragmatic left forces, and their rises to government.

Key words:

Latin America, economy, political process, right side, elections, leadership.

No es el objeto del presente ensayo hacer un análisis pormenorizado de la situación fáctica en cada país de nuestra región. Se advierte que el escenario regional es fragmentado e inestable, y su complejidad está signada por la incertidumbre. Las referencias concretas sobre la situación política interna de algunos países, está relacionada con el interés particular para la política exterior de Cuba. En las anotaciones subsiguientes se analizarán temas transversales que se solapan y combinan entre la economía, la política y la sociedad en la región.

La economía latinoamericana: efectos ¿poscrisis?

Tras la crisis de 2008-2009, originada por los títulos *subprime* en el mercado inmobiliario, y la posterior migración de las inversiones bursátiles al sector de las *commodities*, las principales instituciones internacionales se percataron de que la región sudamericana había amortiguado los impactos globales de la crisis. Dichas instituciones auguraron que los países sudamericanos, con economías sustancialmente asentadas en el sector primario y en las exportaciones, tendrían en el corto plazo un ciclo de elevada renta doméstica.

Sin embargo, el ciclo de crecimiento que impulsó la reprimarización de las economías, terminó abruptamente con la caída de los precios en su cotización. El caso más visible es el del petróleo, fuente principal de ingresos para varios países que se destacaron por reestatizar sus recursos naturales, una política más redistributiva con inversión social, e independencia y activismo en política exterior.

En Venezuela, mucho antes del triunfo de la Revolución Bolivariana, había nacido la idea de «sembrar el petróleo». Bajo ese

enfoque fue que el finado presidente Hugo Rafael Chávez Frías modificó la economía venezolana. En otras palabras, y válido para el conjunto de las economías sometidas a análisis: «derramar» los ingresos provenientes de la renta obtenida por el comercio exterior de los productos primarios, sobre otros sectores de la economía para dinamizarlos, y para reducir y/o eliminar la deformación de la estructura económica.

Sin embargo, en la región se ha acentuado la dependencia en la producción de bienes primarios, con énfasis en el comercio extrarregional abierto y conectado a las cadenas globales de valor. Esta tendencia se ha impuesto en desmedro del comercio intrarregional, ejerciendo un efecto desarticulador en los proyectos de integración. Particular importancia en este panorama desalentador, tiene el hecho de que varias de las economías globales más importantes han ralentizado su dinamismo, y existe una sobreoferta en el mercado de bienes primarios que no contribuye positivamente a estabilizar, o incluso recuperar su valor en la cotización internacional.

En América Latina, hay una tendencia creciente a adquirir en el corto plazo elevados montos de deuda pública, revirtiendo el proceso de desendeudamiento externo que había comenzado a mediados de la primera década del siglo. Más aún, ese proceso no va dirigido a financiar la inversión productiva, sino a sostener el valor de las monedas nacionales. Y como contrapartida implica aceptar el tradicional paquete de medidas de ajuste que emanan de las instituciones financieras internacionales.

Paralelamente, con la justificación de combatir la corrupción, facilitar la inversión productiva y mejorar la inserción económica internacional a través de las cadenas globales de valor, ha comenzado un nuevo ciclo de privatización de los sectores estratégicos de las economías sudamericanas. Únase a esto que las nuevas inversiones extranjeras serán beneficiadas con un marco regulatorio flexible, donde destaca la reducción considerable de las tasas impositivas, como medida destinada a fomentar dicha inversión.

Un factor a tomar en cuenta, es la enorme presión que en términos de riesgo-país (según las agencias calificadoras) se genera como consecuencia de la inestabilidad política. Los casos de Brasil y Venezuela, permiten comprender los efectos negativos de un proceso de *impeachment* presidencial, o de enfrentar una prolongada y

desgastante violencia callejera combinada con el desabastecimiento de bienes. En términos poco prolijos, algunos de los efectos más notables son: fuga de capitales, descenso de la inversión externa, inflación.

Por otra parte, hay que considerar el nuevo protagonismo de la República Popular China en su relación con las economías sudamericanas. Ciertamente China se ha convertido en la mayor fuente de financiamiento externo para América Latina y el Caribe, entre 2005 y 2015 (125 mil millones de dólares estadounidenses-USD). Incluso ha roto una vieja tendencia geográfica de las exportaciones, en las que los países sudamericanos ribereños con el Océano Pacífico concentraban sus exportaciones en Estados Unidos, a la vez que los del Atlántico (salvo Venezuela) hacían algo similar, pero con Europa. Chile, Perú y Brasil pasaron a tener como principal socio comercial a China. La gran interrogante es en qué sectores se concentrarán las adquisiciones chinas, toda vez que su mercado interno ha comenzado a cambiar sus patrones de consumo y demandar bienes de mayor valor agregado, y menos productos primarios. El mayor potencial exportador latinoamericano pudiera concentrarse en el sector agroalimentario —si no saturan el mercado con una sobreoferta, como ya sucedió en 2017 con algunos productos colombianos— y en el de los servicios. Los mayores afectados serían los sectores minero-metalúrgico y petrolero.

Si los sudamericanos quisieran obtener el mayor beneficio posible en su relación económica-financiera-comercial con China, tendrían que reforzar su integración para viabilizar proyectos de escala regional que fueran sostenibles ambientalmente. Esto sería igualmente útil en el marco del TPP, aún con la ausencia de Estados Unidos.

En la medida en que la presencia económica, financiera, comercial y tecnológica de la República Popular China sea percibida desde un sector del bloque de poder estadounidense como un desafío a su hegemonía en lo que consideran su área natural de reproducción de su poderío, en esa fisura en el capitalismo global, es posible entonces pujar por profundizar mayores márgenes de autonomía, siempre que esto coincida con la voluntad política de la clase dominante en cada país. Nótese que omito referirme a los proyectos emancipatorios, pues estos, aunque también pudieran beneficiarse, se encuentran sometidos a tensiones internas, que lógicamente incluyen al sector productivo.

Latinoamérica: giro a la derecha y criminalización de la oposición política y social

Habría que considerar la hipótesis de que el proceso de emergencia de gobiernos nacionalistas-desarrollistas fue, además de una consecuencia de las luchas populares, expresión de una retirada estratégica de los sectores más conservadores y reaccionarios de la política regional, con la finalidad de transferir la administración de la crisis, preservar la legitimidad del sistema y evitar procesos de mayor radicalización política.

En todos los casos, el acceso del progresismo al gobierno implicó en no pocas ocasiones la aceptación de una «camisa de fuerza» institucional, alianzas tácticas con fuerzas políticas con mayor capacidad de articulación y compromisos frente a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI's). Paralelamente, en ese mismo sentido, habría que entender el nuevo constitucionalismo sudamericano como el resultado de una búsqueda de consensos y la afirmación de un nuevo pacto social que condujera a la modernización de esos Estados-nacionales en el contexto de los actuales procesos globalizatorios. Si bien es cierto que el nuevo marco jurídico expresa un acervo más amplio de derechos económicos, políticos y sociales, no siempre se logró fomentar las garantías materiales para su ejercicio. El nuevo constitucionalismo latinoamericano sustituyó un marco jurídico obsoleto para las nuevas necesidades del capitalismo en el siglo XXI.

A esa primera época de «retirada estratégica», siguió una de «desgaste activo», con el empleo combinado de ONG's que pervierten y contraponen actores sociales, fracturas de coaliciones, permanente ataque multimediático, empleo mínimo de recursos violentos (considerados menos legítimos o ilegítimos en la tradición política regional) y la persecución judicial de los políticos que habían protagonizado el liderazgo, no solo desde la presidencia, sino también en las bases sociales de los gobiernos progresistas.

La concentración de la conducción de los procesos políticos que aspiraban al cambio en un liderazgo carismático y personal, funcionó de manera simultánea como una fortaleza y debilidad. No debe ignorarse que ese ejercicio de poder está limitado por reglas preestablecidas de una cultura política donde la reelección continua y la permanencia por largo tiempo como primer mandatario, no es apreciada como condición

necesaria para asegurar cambios políticos y sociales progresivos, sino como una expresión antidemocrática. Esto es lo que padecieron Lula, Chávez, Correa, Evo y los Kirchner.

Al desaparecer ese liderazgo por muerte física o política, o por ausencia de mecanismos constitucionales que permitan la continuidad y legitimidad del progresismo, los procesos quedaron acéfalos y huérfanos. Cristina Fernández tuvo en Scioli un magro candidato de relevo a su presidencia, con un perfil personal y programa político no muy diferente al de Macri; Correa tuvo que asumir su reemplazo con la candidatura de Lenin Moreno —quien en poco tiempo ha demostrado la fragilidad de una formación tan plural como Alianza País, revirtiendo las políticas de su antecesor, tanto en su dimensión interna como internacional—; a la muerte del presidente Chávez, las fuerzas bolivarianas, pese a sus disensos internos, han tratado de recomponerse en medio de la turbulencia en torno al presidente Nicolás Maduro; Evo Morales ha buscado múltiples opciones para reelegirse, pues otro candidato tendría menos posibilidades de continuar el proyecto del gobierno del IPSP-MAS y sus aliados.

Si bien es cierto que el carisma político no se transfiere, ya que depende de las cualidades de cada líder, la única posibilidad de saldar esa deuda es promoviendo una construcción política diferente, de naturaleza colectiva y sin protagonismos personales. A Lula le cercenaron su primera opción de candidato, y luego removieron a Dilma Rousseff en su segundo mandato. Esto explica en parte, el porqué del ensañamiento del sistema judicial brasileño para impedir una nueva postulación de Lula, pues claro estaba que no tenía un relevo. El «progresismo» o la «izquierda» latinoamericana (entendiendo por esta a una diversidad de gradaciones cuyo denominador es la lucha contra el conjunto de dominaciones solapadas en la política, particularmente la de naturaleza neoliberal) padece de una orfandad de liderazgos. Muchos de estos problemas no son nuevos y ya estaban descritos en la propuesta que hicieron Ciro Gómez y Roberto Mangabeira a mediados de los años 90 del pasado siglo.¹

No se puede menospreciar un asunto clave para la política, en especial para los «progresismos» en tanto asumen un discurso, prácticas e identidad de izquierdas. Si comprendemos que la ética y la

¹ Ciro Gómez y Roberto Mangabeira Unger: *O próximo passo: uma alternativa prática ao neoliberalismo*, Topbooks, Rio de Janeiro, 1996, pp. 38-40 y 140-155.

moral, pese a mantener un acervo común en las sociedades, también tienen un prisma ideológico y político, entonces no resultará difícil asumir que la ética política y la moral del «progresismo» y de «las izquierdas» deben ser y parecer diferentes al de la Derecha. El tema sensible de la corrupción, fenómeno de antaño que atañe al comportamiento de los servidores/funcionarios públicos, si bien tiene un costo para cualquier político, es de mayor gravedad cuando sucede con la participación o, por lo menos, ante la pasividad de las fuerzas progresistas.

Los casos recientes de Lava Jato y Petrolão, así como el de los Papeles de Panamá, no dejan dudas acerca de los vínculos de la política regional con los delitos de «cuello blanco». Pero remarcan a su vez el carácter selectivo de la aplicación de la justicia. Macri ha sido cuestionado duramente, pero no está sometido a la presión de un proceso judicial. Sin embargo, la función judicial trata de mantener una apariencia de imparcialidad en su desempeño. Así en Colombia, ante la extensión transfronteriza de los sobornos pagados por Odebrecht, el ex senador uribista Otto Bula fue capturado y entregado a la justicia. Si bien el ámbito político peruano ha mostrado ser uno de los más corruptos en la región, el enjuiciamiento en el pasado y en el presente del expresidente Alberto Fujimori, y los actuales procesos abiertos contra la excandidata y lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori, así como de los expresidentes Alan García Pérez,² Ollanta Humala Tasso, Alejandro Toledo y la renuncia forzada, acompañada de una medida cautelar que le impide viajar al exterior, contra Pedro Pablo Kuczynski, pretende marcar una ruta de «honestidad». En Brasil Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, fue destituido, y el expresidente Temer ha sido detenido para ser procesado judicialmente.

Hay que resaltar que los cambios de gobierno y su «reforzamiento» se están generando por vía electoral o judicial, tratando de involucrar lo menos posible a las fuerzas armadas, que se mantienen en apariencia como institución respetuosa y subordinada del poder público. Si

² El suicidio de Alan García Pérez, al publicarse otros elementos que fundamentaban la acusación de corrupción vinculados a Odebrecht, así como la sentencia judicial de prisión preventiva por tres años contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, confirman el desmoronamiento de la política y los políticos tradicionales del Perú. Queda así abierta la puerta hacia un futuro totalmente desconocido, donde se entremezclan la posibilidad de que dichos partidos se reconstruyan sobre la base de un nuevo liderazgo, y también la emergencia de otras fuerzas políticas que, desde la izquierda y la derecha, pulsen por una disputa del poder político.

hacemos una mirada rápida, Fernando Lugo y Dilma Rousseff fueron depuestos después de juicios políticos. El papel estratégico de las instituciones judiciales al servicio de las oligarquías nacionales sudamericanas ha sido impedir el ascenso de líderes políticos —caso de Piedad Córdoba en Colombia, y de la lideresa en prisión del Movimiento Túpac Amaru en Argentina—, o la «muerte política» de Dilma y Lula, incapacitado para presentarse como candidato presidencial por el PT y sus fuerzas aliadas. Hay procesos legales para enjuiciar a Rafael Correa en Ecuador, y Raúl Séndic en Uruguay, y está el decurso legal del caso Nisman-AMIA contra Cristina Fernández en Argentina, y el proceso seguido contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. La Derecha política está «blindando» su permanencia en el poder al descalificar políticamente a sus principales rivales.

Lo anterior no significa que se haya eliminado el empleo de la violencia política, tal como se aprecia en el caso venezolano —contra militantes, simpatizantes o líderes del chavismo— y la eliminación de líderes sociales y desmovilizados de las FARC-EP en Colombia —concentrado en un grupo social determinado—, o de manera individual, como sucedió con Santiago Maldonado en Argentina y recientemente contra Marielle Franco, líder regional del PSOL, en Brasil. Ello implica que el recurso del exterminio físico está siendo empleado en «dosis mínimas» para atemorizar a las sociedades con el fantasma del Terrorismo de Estado, que fue práctica común en la época de los 70 e inicios de los 80 del pasado siglo.

La victoria de Jair Bolsonaro ha permitido que afloren a nivel continental los nostálgicos de las dictaduras militares y del orden dictatorial. Existe una posibilidad de que la violencia ejercida desde el Estado se transforme nuevamente en genocidio político contra los partidos y organizaciones sociales y políticas identificados genéricamente como de Izquierda. Peor aún, existe la posibilidad de que una especie de Termidor se extienda y alcance incluso a fuerzas que hoy se ubican en la Derecha moderada, pero que comparten ideologías, valores y prácticas consustanciales a una matriz liberal-democrática. Todo ello configura un escenario, aún menor, de una «avalancha» de los sectores más conservadores y autoritarios, refractarios a cualquier política social inclusiva, que generarían condiciones de posibilidad para que el capital transnacional encuentre no solo un Estado reducido, sino condiciones ideales para generar mayor

plusvalía y acceder casi sin límites políticos y jurídicos a un ciclo vigoroso de saqueo de los recursos naturales, transferencia de costos productivos ambientales y un incremento notable en la tasa de retorno de sus ganancias.

En el caso concreto de Colombia, el Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana sufrió un primer revés tras la consulta popular en la que por estrecho margen fue derrotada la opción que favorecía su implementación. Así, fue sometido a revisión, aceptándose a pie juntillas todas las reformulaciones impuestas por el uribismo. Tras la nueva versión del texto del acuerdo, ha quedado pendiente el tema de la justicia transicional —cuestionada por el actual presidente Iván Duque—, así como la implementación efectiva de programas que permitan la reinserción social y económica de los desmovilizados. Las FARC-EP cumplieron no solo con el cronograma de concentración en las denominadas *zonas veredales*, sino que también se desmantelaron militarmente al realizar la entrega de armas bajo verificación internacional,³ y hacer público el listado de bienes que componían su patrimonio. Pero la inseguridad ante la presencia activa de grupos paramilitares en las antiguas zonas bajo control guerrillero, los problemas de infraestructura y servicios básicos, y la cuestión de los proyectos productivos, en especial los vinculados al sector agrario, han desestimulado a los guerrilleros desmovilizados. La Misión de la ONU en Colombia tiene cifras controversiales sobre el abandono de esas zonas por poco más de la mitad de los desmovilizados —y proporcionalmente mayor impacto en los ex mandos medios—, algunos de los cuales estarían asociándose, como forma de subsistencia económica, a grupos paramilitares o criminales. Aunque se reconoce que muchos de estos desmovilizados se han desplazado a zonas de reencuentro con su familia.

Tras la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, proceso electoral que estuvo marcado por el asesinato y las amenazas a la vida de líderes sociales y políticos de la izquierda colombiana, y en particular de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), parece casi inviable la aplicación de lo alcanzado en la negociación de paz. Iván Duque representa a los sectores más radicales de la derecha

³ León Valencia Agudelo (comp.): *Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo: a un año del acuerdo de paz*, Fundación Paz & Reconciliación, Bogotá D.C., 2017, p. 20.

colombiana, y es favorable a la revisión de los acuerdos, en especial el tema de la jurisdicción especial para la paz. Es notorio que hay acusaciones contra dirigentes de la otrora guerrilla y hoy partido político, que pretenden castrar su legitimidad política e histórica atacando su liderazgo.

De vuelta a la exclusión: el efecto social del neoliberalismo 3.0

Históricamente, en Sudamérica hay dos etapas iniciales de reforma neoliberal: la del experimento chileno de los *Chicago boys* en la época de Pinochet, y una segunda y mucho más amplia, que entendemos como resultado del Consenso de Washington. Tras el retorno de los gobiernos de Derecha, como superación del período de los gobiernos que varios autores han denominado *postneoliberalismo*, las nuevas políticas de recorte del gasto social aplicadas en Argentina y Brasil, unidas al encarecimiento de los servicios básicos y la inflación en la economía, han perjudicado notablemente al ciudadano de las clases sociales menos favorecidas, e incluso vuelven a contraer a la clase media.

Hay que considerar que probablemente los actuales gobiernos orientados hacia la Derecha política sean parte de una transición institucional. Al adquirir el costo político en el corto plazo, por la aplicación de desmesuradas medidas de ajuste económico, dejan abierta la posibilidad de que emerjan gobiernos con igual signo ideológico, pero con políticas de estabilización económicas más racionales que le otorguen legitimidad política (policía bueno-policía malo). No debe pasarse por alto, que las extremas políticas regresivas asumidas por el gobierno *de facto* de Michel Temer en Brasil, crearon un margen amplio para que cualquier reducción de su alcance negativo, por mínima que esta pueda ser, se traduzca en un efecto positivo y legitimador para la presidencia de Bolsonaro.

Hay varios asuntos que de manera imperiosa preocupan por su regresión en el ámbito latinoamericano: el empleo y su calidad, los salarios, el sistema de pensiones, y como se van preparando esas sociedades hacia un futuro en el que será cada vez más creciente su población de la tercera edad, lo cual demandará una mayor cobertura de servicios. Se puede afirmar que en la etapa de gobierno de Macri y Temer, el aumento del desempleo y la reducción notable de la inversión social,

incide negativamente no solo en términos de ingresos, sino también de adquisición de bienes y acceso a servicios básicos —estos por el incremento de las tarifas—. Adicionalmente, la presencia sustitutiva del Estado por instituciones privadas en la gestión de los fondos de pensiones, tal como es el caso de Chile, afecta considerablemente el bienestar de los jubilados.

Procesos electorales: balance de lo que sucedió y perspectivas futuras

Los años precedentes legaron detalles interesantes sobre el comportamiento de los procesos electorales latinoamericanos, especialmente para comprender el llamado «giro a la derecha».

En 2015, en las presidenciales argentinas terminó la época de gobierno kirchnerista. Influyó la división del voto peronista —Scioli se presentaba solo como el candidato del Frente para la Victoria (FPV)—, más la ausencia de una diferencia radical en el discurso y en el programa del FPV y Cambiemos. También resultó de dudosa eficacia el forzado distanciamiento que tomó Scioli de Cristina Fernández.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, Argentina retomó una política exterior muy parecida a la «relación carnal» con Estados Unidos. También se produjo un cambio notable en el ejercicio de los cargos públicos con el nombramiento de un gabinete de empresarios, con una visión opuesta y crítica respecto al modelo económico de la era Kirchner. Pese a generar una avalancha de medidas impopulares, Macri ha logrado establecer una cómoda bancada en el legislativo, negociando con el Bloque Justicialista —escisión del FPV— y con el Frente Renovador, para lograr una mayoría con la cual imponer los temas de su agenda en ese ámbito.

En 2016, se celebraron elecciones congresionales y presidenciales en Perú. Aunque la izquierda peruana renació electoralmente con la candidatura de Verónica Mendoza por el Frente Amplio, y esa fuerza se convirtió en la primera minoría —beneficiada en parte por el retiro de la candidatura del Partido Nacionalista Peruano (PNP) del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, aún está por determinar el costo político que en lo personal puede representar el hecho de que llamara a sus partidarios a votar por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ganó la presidencia frente a Keiko Fujimori en segunda vuelta. La hija del

expresidente Alberto Fujimori, tenía un programa conservador en lo político y liberal en lo económico, y su candidatura estuvo afectada por escándalos de corrupción por los fondos de financiación de su campaña electoral, que algunos alegan proceden del narcotráfico. Como se conoce, la debilidad en el legislativo de PPK lo llevó a aceptar, ante una moción de censura, el apoyo de parte de la bancada fujimorista —coordinada por Kenji Fujimori— a cambio del indulto presidencial por «cuestiones de salud» a favor de Alberto Fujimori. El escándalo político subsecuente, junto a alegaciones de corrupción —caso Odebrecht—, precipitó su renuncia.

Las elecciones presidenciales en Chile enfrentaron a fines de 2017 a Sebastián Piñera frente al candidato de izquierda Alejandro Guillier. La derrota de este último representó un retroceso sustancial, pues su agenda incluía la reforma de la Constitución vigente (promulgada en la época de Pinochet), el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios (en especial los mapuches) y la eliminación de la Ley del Cobre, que transfiere automáticamente buena parte de los beneficios de la compañía estatal chilena al gasto de defensa. Piñera prometió dar solución a problemas que inciden directamente en el ciudadano común: pobreza, desempleo, seguridad ciudadana y el costo del sistema de salud. Pero el voto dividido de la izquierda en primera vuelta y la abstención de una parte en segunda, favoreció a Piñera. Influyó también en la derrota de Guillier el escándalo que vinculaba con la corrupción al hijo de Bachelet y a su nuera. No obstante, la principal interrogante es cómo piensa resolver los problemas económicos cuando más de la mitad de los trabajadores percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, existiendo además una brecha social profunda, toda vez que el 1% de la población concentra el 33% de la riqueza.

Las elecciones de Ecuador estuvieron matizadas, no solo por el acercamiento mediático de Lenin Moreno a la oposición a Correa, sino también por el enjuiciamiento y sentencia a prisión del exvicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir sobornos de Odebrecht cuando era Ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012. El conflicto que enfrenta a Lenin Moreno y Rafael Correa dividió a Alianza País, pero se tradujo también en el establecimiento de alianzas entre Moreno y sectores de la oligarquía ecuatoriana, que brindaron su apoyo político para que resultara electo en la segunda vuelta. Los

efectos inmediatos se perciben en el recibimiento de altos oficiales del Comando Sur, así como en la reducción de la comunicación que sostiene Julian Assange, fundador de Wikileaks, con el Mundo. Assange pasó de estar confinado en la sede diplomática ecuatoriana en Londres, a ser detenido por las autoridades británicas.⁴ Resta por ver si finalmente el Reino Unido procederá a extraditarlo a Estados Unidos. El realineamiento de Lenin Moreno con la derecha latinoamericana es apreciable en la decisión de su gobierno de solicitar la salida de su país de UNASUR y sus severas críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2018 la disputa electoral entre la oleada conservadora y progresista se mantiene: 4 de febrero: Costa Rica; 4 de marzo: Elecciones municipales y parlamentarias en El Salvador; 22 de abril: Paraguay; 20 de mayo: Venezuela; 27 de mayo (primera vuelta) y 17 de junio (segunda vuelta); 1 de julio: México; 7 de octubre (primera vuelta) y 28 de octubre (segunda vuelta): Brasil.

En las elecciones presidenciales en Costa Rica, Carlos Alvarado, candidato oficialista por el Partido Acción Ciudadana (PAC) se impuso en la segunda vuelta frente al ganador de la primera, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN). De este modo, Carlos Alvarado será quien gobierne entre 2018 y 2022, evitando el arribo del movimiento evangélico a la Presidencia de la República de Costa Rica.

Paraguay celebró en diciembre pasado sus primeras elecciones internas, especialmente para definir el candidato de la gobernante Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado), entre Santiago Peña (candidato del presidente Horacio Cartes) y Mario Abdo Benítez, de un sec-

⁴ Tras una serie de excusas, refutadas tanto por sus abogados defensores como por exdiplomáticos ecuatorianos en su legación en Reino Unido, el gobierno de Lenin Moreno retiró de forma escandalosa la ciudadanía ecuatoriana y el asilo diplomático que habían sido otorgados a Assange. Muchas de las «razones» que argumentaron tanto el presidente Moreno como sus ministros de exteriores e interior, van desde las poco probables actividades de espionaje contra otros gobiernos coordinadas por Assange junto a sus correligionarios de Wikileaks, hasta conductas que rayan con el comportamiento de una persona con una patología psiquiátrica. Lo cierto es que el profundo malestar de Lenin Moreno nace de las revelaciones de los llamados Ina Papers, que vinculan al actual mandatario ecuatoriano y miembros de su familia con lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales y empresas *off-shore*. Este patrimonio, adquirido de forma supuestamente ilegal, habría sido empleado en beneficio propio para adquirir bienes y servicios, entre ellos propiedades inmuebles en España. Sin embargo, a esto se une el préstamo aprobado por el FMI de 4200 millones de dólares estadounidenses al Ecuador, que para algunas fuentes sería parte del «pago» por la entrega de Assange.

tor disidente del mismo partido. Como contendiente se encuentra la alianza Ganar, conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la izquierda organizada en el Frente Guasu. Esta última organización ha sido ambivalente, pues algunos de sus representantes en el legislativo habían firmado, junto a otros del Partido Colorado, un documento para facilitar la reelección de Cartes, quizás con la intención de beneficiar con ello al expresidente Fernando Lugo. El candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, quien ha sido crítico de la gestión de Cartes, logra imponerse ante el candidato del PLRA-Frente Guasú, Efraín Alegre.

Con el 99,67 % de las mesas escrutadas, los más de 4,2 millones de ciudadanos habilitados para votar registraron una participación de tan solo el 61,40 %. Mario Abdo Benítez, candidato derechista de Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, se impuso con el 46,44% de los votos sobre Efraín Alegre, candidato liberal de Alianza Ganar —Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Frente Guasú (FG)—, quien obtuvo el 42,74% de los votos.

Los electores optaron por la continuidad de un gobierno de derecha, muy vinculado con los sectores agroexportadores, sin respuesta alguna a la situación de emergencia social que vive el país, donde más de un cuarto de la población sigue en la miseria, mientras el PIB mantiene un crecimiento sostenido del 4,5 %. Continúa siendo el país más pobre de Sudamérica, al tiempo que el Partido Colorado sigue comandando los destinos del país y con ello aumenta el giro neoliberal en la región.

Las elecciones primarias y legislativas en Colombia, dejaron un espectro fragmentado, pero con tintes de derecha. De 108 senadores, los partidos más a la derecha se hicieron de 50 curules —Centro Democrático, 19, Cambio Radical, 16, y Partido Conservador, 15—. Las fuerzas políticas de centro-izquierda representan la cuarta parte del Senado —Alianza Verde, 10, Polo Democrático Alternativo, 5, los Decentes, 4, y FARC, 5—. A ellos se deben sumar dos Senadores indígenas cuyo voto casi siempre se alinea a este bloque.

Una vez que Iván Duque ha tomado posesión, y en el contexto de una fragmentación política del legislativo, es probable que se intente llegar a acuerdos coyunturales, o que la derecha «reviva» la coalición de gobierno «Unidad Nacional», integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, con la finalidad de hacer viable las políticas del nuevo gobierno electo.

En Venezuela, el 20 de mayo se efectuarán los comicios presidenciales (2019- 2025) y la elección de los Consejos Estadales y los Cabildos o Consejos Municipales (2018-2021). El candidato de continuidad de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros fue reelegido con más de 6 millones de votos, lo que representa 4 millones de votos superior al candidato Henri Falcón —Avanzada Progresista (AP), Partido Movimiento al Socialismo (MAS) y Partido Socialcristiano (COPEI)—.

No obstante, los niveles de polarización política, la situación económica, los niveles de desabastecimiento e inflación y la guerra mediática, entre otros factores, mantuvieron elevados los niveles de incertidumbre de los pronósticos electorales. El triunfo electoral del candidato Nicolás Maduro resultó convincente en relación al resto de los candidatos, sin desconocer el significativo índice de abstencionismo registrado en dichos comicios, el mayor desde 1958.

2018 es un año clave en Bolivia para la conformación de candidaturas de cara a las elecciones presidenciales a final de 2019. Evo Morales pudiera ser la opción que garantice la continuidad del IPSP-MAS, y profundice los cambios con la implementación de la Agenda Patriótica 2025. A él se le opone Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, con su propuesta de Federalismo para Bolivia y el liberal Samuel Doria Medina de Unidad Nacional. Sin embargo, aún pueden presentarse otros candidatos, especialmente alguno que logre captar los disensos en la Central Obrera Boliviana y en segmentos de la población originaria. A inicios de enero, al prolongado paro médico se unió un paro cívico en Santa Cruz, que obligó a Evo Morales a acceder a la petición de abrogación del Código Penal.

En el caso de México, tras una victoria arrasadora en las gobernaciones y otros cargos electivos, triunfó el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador. Aún sin asumir la presidencia, AMLO ha dejado claro que sus principales prioridades son los servicios básicos a la población, y el tema de la inseguridad ciudadana, pero con un enfoque que, lejos de hacer énfasis en el enfrentamiento armado a los carteles del narcotráfico, hace hincapié en la solución de los problemas de orden social y económico que han empoderado al crimen organizado. Quizás lo cuestionable es que, sin asumir el cargo, sea su protagonismo el que haya influido en la renegociación del TLCAN sin la participación de Canadá.

De cara al futuro: qué podría suceder.

La derecha sudamericana podría consolidarse institucionalmente en un número importante de países, alineándose con Estados Unidos en política exterior, y provocando un aislamiento creciente de Bolivia y Venezuela, países donde se sostienen proyectos progresistas, pero con un notable costo político. Pese a todo, las fuerzas progresistas de una izquierda menos radical, lograrían posicionarse de manera visible en Chile, Paraguay y Perú. En Ecuador, la reversión sustancial de las políticas sociales y económicas implementadas durante el gobierno de Rafael Correa, aunque con resistencias de múltiples sectores y en particular de aquellos que constituyeron un nuevo movimiento político junto al expresidente Correa, podrían abrir el espacio para el retorno al gobierno a la partidocracia tradicional que había sido desplazada a un papel secundario durante la Revolución Ciudadana.

En Colombia el incumplimiento de los acuerdos de paz, y la ruptura de los diálogos con la insurgencia armada del ELN, provocaría un sustancial incremento de la violencia política. En ese contexto, es probable un fracaso de la inserción política de las FARC como partido legal. Esto incidiría en que una fracción de sus cuadros y militantes desistan de la experiencia legal, alejándose de la política, siendo absorbidos por otras fuerzas de la centro-izquierda, reintegrándose a la lucha armada o siendo cooptados por los grupos armados paramilitares o las estructuras de poder sobre las que se asienta la oligarquía colombiana.

El fracaso de la imposición maximalista de una agenda neoliberal en Argentina y Brasil puede conducir a un ciclo de reformas que atenúen sus consecuencias sociales. Consideremos que, en aras de preservar la legitimidad y estabilidad del sistema, tanto el gobierno de Bolsonaro⁵ como el de Macri en un segundo mandato —o, preferentemente, un sucesor desde la Derecha—, podría reducir la profundidad de las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, implementándose otras de igual matriz, pero con sentido común. Cualquier reducción de las políticas de Temer o de Macri resultaría en una ganancia política. Ello contribuiría a una alternancia entre fuerzas que responden a las elites políticas y empresariales en Argentina y Brasil.

⁵ La trayectoria política de Bolsonaro, en la que hacía énfasis en un Estado con un rol importante en la economía, pudiera colisionar con la de su ministro de economía, clásico *Chicago boy* a favor de la privatización de los activos del Estado.

Sin embargo, lo peor podría suceder si el futuro confirmara el fin del ciclo progresista en América del Sur, con la pérdida de los gobiernos en Bolivia y Venezuela. No obstante, queda una considerable fuerza social y política, que sobre la base del análisis crítico de sus errores comienza un complejo proceso de reorganización, no exento de contradicciones en su interior.

Los procesos de integración nacidos desde el progresismo y cuya estructura institucional aún permanecen, podrían terminar refuncionalizados de acuerdo a los fines de las oligarquías transnacionales. Todavía existe la posibilidad de que sean empleados como mecanismos de inserción internacional y diálogo interregional, en especial ante la posibilidad de mantener una relación equilibrada frente a Estados Unidos, la Unión Europea y la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, también existe la posibilidad de que desaparezcan *de facto*, como sugiere el caso de UNASUR.

Los actuales retrocesos de la izquierda latinoamericana no necesariamente hay que leerlos en clave de derrota. Es cierto que se han perdido importantes espacios que indicarían una derrota política de carácter estratégico en el escenario regional. Pero las temporalidades habría que asumirlas más que por la permanencia en el gobierno, en clave de acumulación de fuerzas, de masa crítica para emprender nuevos proyectos que superen los errores pasados y quizás se planteen de forma más persistente y profunda la construcción de una alternativa que no se limite al horizonte posneoliberal sino poscapitalista.

Desde la intimidad del pensamiento político: la noche es más oscura antes del amanecer

La dialéctica nos enseña que nada es imposible, y existe la posibilidad de mayores retrocesos: la pérdida del gobierno en Bolivia, Nicaragua o Venezuela. A manera de hipótesis admitamos esa posibilidad, para hacer lo imposible por evitarla, y estar preparados en caso de que suceda. Ese escenario es muy negativo, pero las derrotas enseñan más que las victorias. Enseñan a ser humildes, a no confiarnos, a hacer las cosas mejor, a evitar los errores costosos y analizarlos críticamente sin autoflagelarnos. El mayor logro de esta época de gobiernos progresistas con que América Latina recibió el siglo XXI, son los millones de

personas, de ciudadanos que comenzaron a transformarse a sí mismos, a transformar su subjetividad. En ellos radica el potencial de cambio, la nueva acumulación de fuerzas para volver, más que a gobernar, a plantearse las alternativas de un cambio político radical y sustentable.

La izquierda latinoamericana ha de mirarse en el espejo del infatigable Bolívar. O asumimos el lapidario «hemos arado en el mar», o reaccionamos en positivo como «sociedades de las dificultades», capaces de resistir y simultáneamente construir un poder de naturaleza diferente. Hay que intentar, de tantas maneras como sea posible, la independencia real, política y económica. Hay que seguir construyendo esa alternativa socialmente justa y democrática, con participación protagónica de los ciudadanos en los procesos de socialización económica, política, social y del conocimiento.

Cada contexto nacional determinará cuáles son las formas de lucha política apropiadas, incluidas aquellas que quizás hoy parezcan obsoletas. Las formas de lucha que nos parecen superadas pudieran retornar. Tocaré de acuerdo a las condiciones históricas de cada país, que sus movimientos sociales y organizaciones políticas populares, progresistas, de Izquierda(s), definan las vías concretas para construir poder popular, nuevos consensos y una hegemonía emancipadora. Eso no está escrito en ningún manual, no es parte de ningún catecismo político, ni es mera cuestión retórica o teórica, ni siquiera trabajo desde la academia. Ese futuro emergerá de las luchas populares cotidianas, y quizás no sea lejano: los tiempos históricos son bastante variables y pueden sorprendernos.